



## Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Distr. general  
23 de febrero de 2024  
Español  
Original: francés

### Comité de Derechos Humanos

#### Dictamen aprobado por el Comité a tenor del artículo 5, párrafo 4, del Protocolo Facultativo, respecto de la comunicación núm. 3213/2018\* \*\* \*\*\*

<i>Comunicación presentada por:</i>	Thierry Ehrmann (representado por el abogado Vincent Berger)
<i>Presunta víctima:</i>	El autor
<i>Estado parte:</i>	Francia
<i>Fecha de la comunicación:</i>	21 de noviembre de 2017 (presentación inicial)
<i>Referencias:</i>	Decisión adoptada con arreglo al artículo 92 del reglamento del Comité, transmitida al Estado parte el 23 de julio de 2018 (no se publicó como documento)
<i>Fecha de aprobación del dictamen:</i>	17 de julio de 2023
<i>Asunto:</i>	Juicio imparcial
<i>Cuestión de procedimiento:</i>	Agotamiento de los recursos internos
<i>Cuestión de fondo:</i>	Derecho a un juicio imparcial
<i>Artículo del Pacto:</i>	14, párr. 1
<i>Artículos del Protocolo Facultativo:</i>	2 y 5, párr. 2 a)

1. El autor de la comunicación es Thierry Ehrmann, nacional de Francia nacido en dicho país en 1962. Alega que el Estado parte ha vulnerado los derechos que lo asisten en virtud del artículo 14, párrafo 1, del Pacto. El Protocolo Facultativo entró en vigor para el Estado parte el 17 de mayo de 1984. El autor está representado por el abogado Vincent Berger.

\* Aprobado por el Comité en su 138º período de sesiones (26 de junio a 26 de julio de 2023).

\*\* Participaron en el examen de la comunicación los siguientes miembros del Comité: Tania María Abdo Rocholl, Farid Ahmadov, Wafaa Ashraf Moharram Bassim, Rodrigo A. Carazo, Yvonne Donders, Mahjoub El Haiba, Carlos Gómez Martínez, Laurence R. Helfer, Bacre Waly Ndiaye, Hernán Quezada Cabrera, José Manuel Santos Pais, Soh Changrok, Tijana Šurlan, Kobauyah Tchamdja Kpatcha, Teraya Koji e Imeru Tamerat Yigezu. De conformidad con el artículo 108 del reglamento del Comité, Hélène Tigroudja no participó en el examen de la comunicación.

\*\*\* Se adjunta en el anexo del presente dictamen un voto particular (disidente) de Bacre Waly Ndiaye, miembro del Comité.



## Hechos expuestos por el autor

2.1 El autor es escultor plástico. Padece una enfermedad genética grave e incurable que se le diagnosticó en 1978. En 1999, puso en marcha un proyecto artístico llamado *La Demeure du Chaos* en una finca que adquirió en Saint-Romain-au-Mont-d'Or, cerca de Lyon. *La Demeure du Chaos* es un museo que acoge gratuitamente a más de 100.000 visitantes al año. El autor realizó una serie de obras en el exterior de la finca (pinturas, inscripciones, dibujos, inserción de bloques de piedra, etc.). Explica que estas obras forman parte de su labor artística. El 24 de octubre de 1984, el juez de tutela de Lyon decretó su puesta bajo tutela; esta medida duró hasta 2000. El 22 de octubre de 2003, tras tres años sin ser objeto de sistema de protección alguno, se sometió al autor a la curatela de su esposa.

2.2 El 15 de febrero de 2005, el alcalde del municipio de Saint-Romain-au-Mont-d'Or redactó un acta donde expuso una serie de infracciones por obras que afectaban al exterior del edificio y el muro perimetral de *La Demeure du Chaos*. Se acusaba al autor de no haber realizado una declaración previa sobre las obras y no haber respetado ciertas reglas urbanísticas. El 16 de febrero de 2006, el Tribunal Correccional de Lyon condenó al autor al pago de una multa de 20.000 euros por la realización de obras sin declaración previa. El Tribunal también ordenó la restitución del lugar so pena de una multa coercitiva de 75 euros por cada día de retraso. El autor, por un lado, y la Fiscalía, por otro, recurrieron esa decisión. En virtud de una sentencia de 13 de septiembre de 2006, el Tribunal de Apelación de Lyon condenó al autor al pago de una multa de 200.000 euros<sup>1</sup> por la realización de obras sin declaración previa, pero no ordenó la restitución del lugar, al considerar que *La Demeure du Chaos* era una obra de arte en su conjunto y que su restitución daría lugar a un edificio totalmente desprovisto de unidad arquitectónica. El autor presentó un recurso de casación contra dicha decisión, al igual que el Fiscal de Lyon y el municipio de Saint-Romain-au-Mont-d'Or.

2.3 En virtud de una sentencia de 11 de diciembre de 2007, el Tribunal de Casación anuló la sentencia considerando que el Tribunal de Apelación de Lyon no había indagado sobre la conformidad de las obras realizadas con las disposiciones suficientemente claras y precisas del plan de ordenación territorial. Por tanto, el Tribunal de Casación remitió el caso al Tribunal de Apelación de Grenoble. Mediante una sentencia de 16 de diciembre de 2008<sup>2</sup>, el Tribunal de Apelación de Grenoble declaró al autor culpable de varias infracciones en materia de urbanismo y decretó la restitución de las partes exteriores del edificio y del muro perimetral a su estado anterior, en un plazo de nueve meses, so pena de una multa coercitiva de 75 euros por cada día de retraso. El autor presentó un recurso de casación contra esa decisión alegando una violación de su libertad de expresión<sup>3</sup>. En virtud de una sentencia de 15 de diciembre de 2009, el Tribunal de Casación desestimó el recurso del autor al considerar que la injerencia, prevista por la ley, estaba justificada<sup>4</sup>.

2.4 El 29 de noviembre de 2011, el juez de tutela decretó el levantamiento de la medida de curatela del autor<sup>5</sup>. Las diferentes sentencias del juez de tutela se mencionaron en el margen de la partida de nacimiento del autor y se publicaron en el Registro Civil. El autor lleva de baja por enfermedad de manera ininterrumpida desde febrero de 2012 y tiene

<sup>1</sup> La sociedad VHI también fue condenada al pago de una multa de 100.000 euros.

<sup>2</sup> En esa fecha, ya se había promulgado la Ley francesa núm. 2007-308 de Reforma de la Protección Jurídica de las Personas Mayores de Edad, de 5 de marzo de 2007, bajo la influencia de la sentencia dictada, el 30 de enero de 2001, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el asunto *Vaudelle c. France*, demanda núm. 35683/97. Sin embargo, el autor no invocó este argumento en el marco del procedimiento ante el Tribunal de Apelación de remisión de Grenoble en 2008, ni cuando presentó su nuevo recurso ante el Tribunal de Casación en 2009.

<sup>3</sup> La sociedad VHI también presentó un recurso de casación.

<sup>4</sup> El 31 de diciembre de 2009, el autor y su esposa, así como la sociedad VHI, habían presentado una demanda (núm. 2777/10) ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por violación de los artículos 6, 7 y 10 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (Convenio Europeo de Derechos Humanos) y del Protocolo núm. 1. El objeto de dicha demanda era diferente del de la presente comunicación.

<sup>5</sup> En la denuncia no se indica el motivo de esta decisión.

prohibido salir. El seguro médico ha reconocido su enfermedad crónica, lo que le permite gozar de una cobertura total de sus gastos de tratamiento.

2.5 El 20 de diciembre de 2011, el prefecto del departamento del Ródano solicitó la intervención del Fiscal de Lyon, ya que el autor no había restituido el lugar y que las multas coercitivas no habían sido efectivas. El Fiscal de Lyon remitió el caso al Tribunal de Apelación de Grenoble para obligar al autor a cumplir las medidas decretadas en la sentencia de 2008. El autor pidió al Tribunal que declarase nulo todo el procedimiento penal iniciado en su contra. Señaló que se había vulnerado su derecho a un juicio imparcial, dado que no se había informado a su curadora de las actuaciones penales iniciadas en su contra. El autor también puso de manifiesto que no se le había practicado ningún examen psiquiátrico antes de que el Tribunal de Apelación de remisión de Grenoble dictase sentencia.

2.6 Mediante una sentencia de 6 de mayo de 2013, el Tribunal de Apelación de Grenoble rechazó las pretensiones del autor y aumentó la cuantía de la multa coercitiva hasta 750 euros por cada día de retraso. El autor presentó un recurso de casación contra esa sentencia, alegando motivos similares a los señalados previamente. El 24 de junio de 2014, el Tribunal de Casación anuló la sentencia de 6 de mayo de 2013 del Tribunal de Apelación de Grenoble estimando que dicho tribunal no podía descartar el argumento de la nulidad por falta de citación de la curadora del autor en las deliberaciones. El Tribunal de Casación remitió el caso al Tribunal de Apelación de Chambéry. Ante este tribunal, el autor solicitó que se ordenase la realización de un examen psiquiátrico para determinar su responsabilidad penal en el momento de los hechos que se le imputaban. En virtud de una sentencia de 30 de abril de 2015, el Tribunal de Apelación de Chambéry rechazó todos los argumentos presentados por el autor respecto de la nulidad. Se negó a ordenar la realización del examen psiquiátrico solicitado por el autor, al considerar que no tenía competencia para pronunciarse sobre un procedimiento antiguo que había adquirido fuerza de cosa juzgada. El autor volvió a presentar un recurso de casación que fue desestimado el 21 de marzo de 2017 porque, en lugar de esforzarse por restituir el lugar, el autor había realizado nuevos cambios en la fachada exterior del establecimiento<sup>6</sup>.

2.7 El 23 de mayo de 2017, el autor presentó una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con el mismo asunto que la presente comunicación. El 21 de septiembre de 2017, el Tribunal, constituido en formación de juez único, desestimó la demanda por inadmisibilidad, dado que los hechos presentados no revelaban ningún indicio de violación de los derechos y libertades garantizados por el Convenio. A este respecto, el autor recuerda la reserva formulada por Francia y aduce que su causa no fue “examinada” por el Tribunal<sup>7</sup>, en la medida en que la referencia general a los artículos 34 y 35 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, sin ninguna explicación, no permite conocer el motivo o los motivos por los que el Tribunal, constituido en formación de juez único, declaró inadmisibles su demanda<sup>8</sup>; en particular, nada indica que la demanda se haya considerado manifiestamente infundada. En consecuencia, el autor considera que su comunicación no ha sido examinada según otro procedimiento internacional.

## Denuncia

3.1 El autor alega que se ha vulnerado su derecho a un juicio imparcial, garantizado por el artículo 14, párrafo 1, del Pacto<sup>9</sup>, debido a la falta de consideración de su condición de persona adulta protegida en el marco de los diferentes procedimientos iniciados en su contra. Aduce que, en contravención de la Ley núm. 2007-308, promulgada el 5 de marzo de 2007, no se notificó ninguna de las diligencias ni ninguna de las resoluciones judiciales a su curadora, que, por tanto, no pudo asistirlo durante el inicio de las actuaciones ni tampoco en

<sup>6</sup> El autor indica que esta es la resolución interna definitiva.

<sup>7</sup> Aunque el autor no los señale, en ciertos documentos de su comunicación se hace referencia a otra sentencia del Tribunal Europeo sobre su caso que se basó principalmente en una violación de su libertad de expresión.

<sup>8</sup> *Achabal Puertas c. España* (CCPR/C/107/D/1945/2010 y CCPR/C/107/D/1945/2010/Corr.1).

<sup>9</sup> Según el autor, es la primera vez que el Comité debe pronunciarse sobre las exigencias del artículo 14, párrafo 1, del Pacto en materia de protección jurídica de las personas adultas protegidas en el marco de un procedimiento penal.

las vistas ante el Tribunal Correccional de Lyon, el 16 de febrero de 2006, y el Tribunal de Apelación de Grenoble, el 16 de diciembre de 2008. Además, recuerda que la Ley núm. 2007-308, aprobada tras la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el asunto *Vaudelle c. Francia* relativo a la protección de las personas adultas protegidas<sup>10</sup>, obliga en particular al Fiscal a informar al tutor o al curador de todo acto relativo a un procedimiento penal sobre la persona adulta sujeta a su protección. Añade que, incluso antes de que se aprobase dicha ley, no recibió las garantías de protección previstas en la sentencia sobre el asunto *Vaudelle*.

3.2 El autor alega que la negación de las autoridades judiciales del Estado parte a ordenar que se le practicara un examen psiquiátrico y a velar por que recibiese la protección garantizada por la legislación francesa a las personas adultas protegidas sospechosas de haber cometido infracciones lo sume en una situación de desventaja y vulnerabilidad con respecto a la parte civil y la Fiscalía, sin consideración alguna por el principio de la igualdad de medios procesales. Alega que se lo privó de esta garantía procesal fundamental durante todo el procedimiento penal iniciado en su contra, que terminó con la sentencia del Tribunal de Casación de 15 de diciembre de 2009. El autor aduce que, en este caso, la realización del examen era tanto más necesaria cuanto que padece de graves trastornos psiquiátricos desde hace más de 39 años.

### Observaciones del Estado parte sobre la admisibilidad

4.1 El 25 de septiembre de 2018, el Estado parte presentó sus observaciones sobre la admisibilidad de la comunicación y pidió al Comité que la declarase inadmisibile.

4.2 El Estado parte considera que, en este caso, la condición relativa al agotamiento de los recursos internos no se cumple respecto del procedimiento penal que culminó en la condena del autor. El Estado parte indica que ese es el motivo por el que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró inadmisibile la demanda, de conformidad con el artículo 35, párrafo 1, del Convenio Europeo de Derechos Humanos, dado que la demanda ante dicho tribunal se había presentado menos de seis meses después de que adquiriera firmeza la decisión por la que se resolvió el procedimiento nacional. Considera que, por los mismos motivos, la comunicación del autor ante el Comité es inadmisibile.

4.3 El Estado parte subraya que el autor ha sido objeto de dos procedimientos distintos: uno sobre su condena penal y otro sobre el aumento de la cuantía de la multa coercitiva por incumplimiento de la sanción<sup>11</sup> impuesta en el primer procedimiento. El Estado parte subraya que, en el marco del primer procedimiento<sup>12</sup>, el autor no presentó reclamaciones en virtud del artículo 14, párrafo 1, del Pacto<sup>13</sup>.

4.4 El Estado parte subraya que, en el marco del segundo procedimiento iniciado contra el autor, este ya no estaba bajo curatela ni tampoco gozaba de ninguna medida de protección jurídica<sup>14</sup>.

4.5 El Estado parte señala además que, a pesar de que las disposiciones de la ley de 5 de marzo de 2007 ya habían entrado en vigor, el autor no presentó alegación alguna respecto de la conculcación del derecho a un juicio imparcial ante el Tribunal de Apelación de Grenoble, en la audiencia de 17 de noviembre de 2008, ni en el momento de su recurso contra la sentencia dictada por dicho tribunal el 16 de diciembre de 2008. El Estado parte indica que dicha alegación solo se formuló en el marco de un segundo recurso presentado contra la sentencia de 16 de diciembre de 2008, que fue naturalmente declarado inadmisibile en virtud de una sentencia del Tribunal de Casación de 15 de mayo de 2012 en vista de su naturaleza

<sup>10</sup> Tribunal Europeo de Derechos Humanos, *Vaudelle c. France*, demanda núm. 35683/97, sentencia de 30 de enero de 2001, párr. 62.

<sup>11</sup> Sanción prevista en el artículo L. 480-7 del Código de Urbanismo.

<sup>12</sup> Este procedimiento terminó mediante la sentencia definitiva del Tribunal de Casación de 15 de diciembre de 2009, por la que se desestimó el recurso del autor contra la sentencia del Tribunal de Apelación de Grenoble de 16 de diciembre de 2008.

<sup>13</sup> *Singh c. Francia* (CCPR/C/106/D/1852/2008).

<sup>14</sup> Se levantó la medida relativa a su curatela en virtud de una decisión de 29 de noviembre de 2011. El segundo procedimiento contra el autor terminó con la sentencia definitiva de 21 de marzo de 2017 del Tribunal de Casación.

manifiestamente tardía<sup>15</sup>. El Estado parte estima que la alegación formulada en el marco de ese segundo recurso no podía prosperar en ningún caso en el contexto del primer procedimiento y que, por tanto, no puede considerarse como el ejercicio de un recurso interno efectivo por parte del autor.

4.6 El Estado parte considera que la alegación relativa a la conculcación del derecho del autor a un juicio imparcial en el marco del segundo procedimiento relativo al aumento de la cuantía de la multa coercitiva no podía cuestionar la sentencia de 16 de diciembre de 2008, en la que se había resuelto definitivamente acerca de su responsabilidad penal. Así, el Estado parte sostiene que el autor no presentó sus alegaciones relativas a la conculcación del derecho a un juicio imparcial ante la jurisdicción competente y considera, en consecuencia, que la comunicación es inadmisibile dado que en ella se invoca una violación del artículo 14 del Pacto por no agotamiento de los recursos internos.

### **Comentarios del autor acerca de las observaciones del Estado parte sobre la admisibilidad**

5.1 El 15 de noviembre de 2018, el autor presentó sus comentarios acerca de las observaciones del Estado parte sobre la admisibilidad de la comunicación<sup>16</sup>.

5.2 El autor refuta el argumento del Estado parte de que el Comité debería llegar a la misma conclusión que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que había declarado inadmisibile la demanda del autor, en vista de que se había presentado menos de seis meses después de que adquiriese firmeza la decisión por la que se había resuelto el procedimiento nacional. El autor alega que al juzgar que “no se han cumplido los criterios de admisibilidad establecidos en los artículos 34 y 35 del Convenio”, el Tribunal se negó deliberadamente a revelar una opción entre las 11 condiciones impuestas por esas dos disposiciones. El autor estima que el Estado parte procura que el Tribunal diga lo que se abstuvo de decir.

5.3 El autor rechaza el argumento del Estado parte de que no se cumple la condición del agotamiento de los recursos internos porque el autor no presentó su argumento relativo a la conculcación del derecho a un juicio imparcial relacionado con la consideración de su condición de persona adulta protegida ante la jurisdicción competente.

5.4 El autor recuerda que, en su sentencia de 24 de junio de 2014, por la que anuló la sentencia del Tribunal de Apelación de Grenoble de 6 de mayo de 2013, el Tribunal de Casación recordó el principio en virtud del cual “dado que la medida de curatela se había publicado, la Fiscalía tenía necesariamente conocimiento de ella [...]” y, a pesar de ello, la Fiscalía se abstuvo de cumplir sus obligaciones respecto del autor durante todo el procedimiento de imposición de la multa coercitiva, es decir, del 5 de septiembre de 2005, fecha del emplazamiento, al 15 de diciembre de 2009, fecha en la que se desestimó el recurso de casación presentado contra la sentencia del Tribunal de Apelación de Grenoble de 16 de diciembre de 2008.

5.5 El autor señala que en todas las etapas de los procedimientos iniciados en su contra, la Fiscalía de las diferentes jurisdicciones implicadas (Tribunal Correccional de Lyon, Tribunal de Apelación de Lyon<sup>17</sup> y Tribunal de Apelación de Grenoble<sup>18</sup>) incumplió su deber de avisar a su curadora; por tanto, esta no pudo asistirlo, asesorarlo, elegir su abogado y darle instrucciones, tomar conocimiento de las conclusiones presentadas, decidir recurrir o no recurrir en apelación o casación, ni ser oída en las audiencias en calidad de testigo. El autor alega que no le incumbía a él ni a su curadora reivindicar la participación de esta en los diferentes procedimientos, precisamente por su condición de persona adulta sometida a curatela.

<sup>15</sup> Véase el artículo 618 del Código de Procedimiento Penal.

<sup>16</sup> En sus comentarios preliminares, el autor destacó que el Estado parte no había respetado el plazo de seis meses establecido por el Comité para presentar sus observaciones sobre el fondo de la comunicación.

<sup>17</sup> En particular en el emplazamiento de 5 de septiembre de 2005 y en la audiencia de 10 de noviembre de 2005.

<sup>18</sup> Lo que explica que su curadora no pudo asistirlo, en particular, en la audiencia de 17 de noviembre de 2008.

5.6 Remitiéndose a la jurisprudencia del Comité sobre las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos<sup>19</sup>, el autor pide al Comité que rechace el argumento relativo al no agotamiento de los recursos internos. A título subsidiario, el autor pide al Comité, como ya lo hizo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con el artículo 6 del Convenio, que añada ese argumento al fondo<sup>20</sup>.

5.7 Contrariamente a lo que afirma el Estado parte, el autor considera que el procedimiento por el que se aumentó la multa coercitiva forma parte del procedimiento que dio lugar a su condena penal. El autor añade que el procedimiento relativo al aumento de la multa coercitiva guarda relación con “una acusación de carácter penal” en el sentido del artículo 14, párrafo 1, del Pacto<sup>21</sup>. El autor alega además que el procedimiento relativo al aumento de la multa coercitiva tiende a modificar —agravándola— una sanción penal sobre la base de que dicha sanción no se habría cumplido, y añade que, por tanto, los derechos protegidos por el artículo 14, párrafo 1, del Pacto se aplican al presente procedimiento. El autor recuerda que presentó dicho argumento en todas las etapas del procedimiento, por lo que agotó los recursos internos en relación con dicha vulneración.

5.8 Respecto del argumento del Estado parte de que ya no estaba bajo curatela durante el procedimiento relativo al aumento de la multa coercitiva, el autor recuerda que la medida relativa a su curatela se levantó el 29 de noviembre de 2011, de oficio y contra la opinión de los médicos, mientras que el juez de tutela de Lyon había reconocido que padecía un trastorno psiquiátrico grave que alteraba su autonomía. El autor alega que los órganos jurisdiccionales que conocieron del caso<sup>22</sup> no concedieron importancia alguna a su estado de salud mental muy deficiente<sup>23</sup>.

5.9 El autor señala que el Estado parte no ha formulado observaciones sobre la admisibilidad del argumento relativo a la negativa del Tribunal de Apelación de Chambéry<sup>24</sup> a ordenar la realización de un examen psiquiátrico a fin de determinar su responsabilidad penal en el momento de los hechos que se le imputan.

5.10 El 10 de diciembre de 2018, el autor presentó comentarios adicionales sobre la admisibilidad de la comunicación. Reclama una renuncia a la ejecución de la sentencia de 16 de diciembre de 2008 del Tribunal de Apelación de Grenoble y a la ejecución de la sentencia de 30 de abril de 2015 del Tribunal de Apelación de Chambéry. El autor reclama también el abandono de todo procedimiento judicial o administrativo cuyo objeto sea idéntico o análogo al de la presente comunicación, así como el reembolso de los gastos y honorarios relacionados con su defensa en los procedimientos penales iniciados en su contra y con su representación en el procedimiento ante el Comité.

### Observaciones del Estado parte sobre el fondo

6.1 El Estado parte subraya que, en cada uno de los dos procedimientos iniciados contra el autor, se respetó su derecho a un juicio imparcial. Respecto del procedimiento penal principal, el Estado parte observa que ni del Pacto ni de la jurisprudencia del Comité se desprende que el artículo 14 del Pacto confiera a la persona adulta protegida el derecho a ser asistida por un curador. El Estado parte destaca que el artículo 14 garantiza únicamente la igualdad y la imparcialidad en los procedimientos judiciales y no puede ser interpretado en el sentido de que garantiza la ausencia de errores por parte del tribunal competente<sup>25</sup>. A este

<sup>19</sup> *Singh c. Francia*.

<sup>20</sup> Tribunal Europeo de Derechos Humanos: *Airey c. Irlanda*, demanda núm. 6289/73, sentencia de 9 de octubre de 1979, párr. 19; *Kremzow c. Austria*, demanda núm. 12350/86, sentencia de 21 de septiembre de 1993, párrs. 41 y 42; *Josef Prinz c. Austria*, demanda núm. 23867/94, 8 de febrero de 2000, párrs. 29 y 30; y *Vaudelle c. Francia*, sentencia de 23 de mayo de 2000.

<sup>21</sup> Véase el artículo L. 480-7 del Código de Urbanismo.

<sup>22</sup> Tribunal de Apelación de Grenoble, sentencia de 6 de mayo de 2013; Tribunal de Apelación de Chambéry, sentencia de 30 de abril de 2015.

<sup>23</sup> Véase el párr. 2.4. anterior.

<sup>24</sup> Sentencia de 30 de abril de 2015.

<sup>25</sup> Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 32 (2007), párr. 26; Comité de Derechos Humanos, *B. d. B. c. los Países Bajos*, comunicación núm. 273/1989, párr. 6.3; y *Martínez Mercader y otros c. España* (CCPR/C/84/D/1097/2002), párr. 6.3.

respecto, el Estado parte alega que no corresponde al Comité determinar si las jurisdicciones nacionales respetaron las disposiciones del derecho interno sino apreciar, en vista de la integralidad del procedimiento del que fue objeto el autor, si este tuvo un juicio imparcial.

6.2 El Estado parte estima que, contrariamente a lo que expone el autor, en el marco del asunto *Vaudelle c. Francia*, la determinación de la existencia de violación no se desprendía de manera automática de la falta de asistencia del curador, sino del hecho de que el demandante había sido condenado sin comparecer en la audiencia, sin ser asistido por un abogado, sin la presencia de su curador y sin que los órganos jurisdiccionales nacionales hubieran podido cerciorarse de que había comprendido la naturaleza y los motivos de la acusación formulada en su contra. El Estado parte sostiene que, en su jurisprudencia ulterior sobre el procesamiento y enjuiciamiento de personas que presentan una alteración de sus facultades mentales, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para valorar si se había vulnerado su derecho a un juicio imparcial, consideró sobre todo si el demandante había podido gozar, de manera efectiva, de las debidas garantías procesales, en particular la asistencia letrada<sup>26</sup>.

6.3 El Estado parte subraya que, en este caso, el autor no indica la garantía adicional que le habría ofrecido la asistencia de su curadora. El Estado parte subraya también que el autor, aunque no estuvo asistido por su curadora durante el procedimiento penal inicial, pudo beneficiarse de todas las garantías del derecho a un juicio imparcial, en particular la asistencia letrada en las diferentes etapas del procedimiento. Destaca que el autor pudo exponer oralmente argumentos de hecho y de derecho en apoyo de su defensa. Recuerda que, aunque la curadora del autor no fue oficialmente avisada de las actuaciones y citada ante las jurisdicciones nacionales, el autor no puede afirmar que la curadora no estuviera informada, en la medida en que se trata de su esposa y que el procedimiento tuvo lugar durante muchos años. Además, el Estado parte subraya que, según la sentencia de 22 de octubre de 2003 en la que se dicta la medida de curatela, las facultades otorgadas a la esposa del autor tenían exclusivamente por objeto proteger los intereses patrimoniales de este, de manera que el juez no estimó necesario ampliar la protección de otro modo. El Estado parte señala asimismo que, debido a que el autor compareció en persona, los jueces pudieron valorar su estado de salud mental y comprobar que comprendía el sentido y la naturaleza de las acusaciones formuladas en su contra.

6.4 El Estado parte precisa que la medida de curatela del autor (y no la de tutela) no significa que haya sido privado de sus facultades mentales ni que no pueda comprender las acusaciones formuladas en su contra y elaborar una estrategia de defensa. Sobre la base de un certificado médico de fecha 25 de agosto de 2010, el Estado parte observa que en la sentencia por la que se levantó la medida de curatela se indicaba que, aunque el autor podía sufrir bipolaridad, no presentaba trastorno intelectual particular o problema de comprensión o de expresión alguno, y que estaba en condiciones de gestionar serenamente las dos sociedades importantes que presidía.

6.5 El Estado parte recuerda que el Tribunal de Apelación de Grenoble observó que el autor había indicado que presidía la sociedad ARTPRICE, cuyo departamento jurídico edita diversos códigos de leyes como el régimen fiscal de las obras de arte, que intervino en las deliberaciones del Senado sobre dicho régimen y que imparte clases en la Universidad de Lyon III para la obtención de un diploma de estudios superiores especializados. Por consiguiente, el Estado parte estima que el autor estaba plenamente en condiciones de comprender los cargos presentados en su contra y presentar una línea de defensa coherente, que la falta de notificación a su curadora no habría podido vulnerar su derecho a un juicio imparcial, y que esa garantía incluso se reforzó con abogados que asistieron al autor en todos los recursos interpuestos, hasta en la instancia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

6.6 El Estado parte subraya que, además de haber presentado ante todas las jurisdicciones nacionales de fondo y de casación una argumentación jurídica detallada, entre otras cosas, sobre el concepto de obra de arte, sobre el hecho de que las actuaciones carecían de

<sup>26</sup> Véase Tribunal Europeo de Derechos Humanos, *G. c. Francia*, demanda núm. 27244/09, sentencia de 23 de febrero de 2012.

fundamento jurídico y eran contrarias al principio de los delitos y las penas, por falta de previsibilidad y de claridad de la ley, sobre el alcance de la citación y del recurso ante el Tribunal de Apelación tras una remisión después de la casación, sobre la prescripción de la acción pública, y sobre la violación de su derecho a la libertad de expresión, el autor pudo emplazar ante el Tribunal Correccional a un testigo de descargo que vino a apoyar sus declaraciones sobre el concepto de obra de arte. El Estado parte sostiene que el autor pudo beneficiarse, durante el procedimiento penal inicial que dio lugar a su condena, del ejercicio efectivo de los derechos consagrados en el artículo 14 del Pacto.

6.7 El Estado parte sostiene, en primer lugar, que las jurisdicciones nacionales no vulneraron el derecho del autor a un juicio imparcial durante el procedimiento penal inicial. Por consiguiente, el autor no puede acusar a los jueces encargados en dicho momento del procedimiento relativo al aumento de la multa coercitiva de no haber anulado el primer procedimiento. A título subsidiario, el Estado parte observa que el derecho del autor a un juicio imparcial también se respetó en el marco de ese segundo procedimiento. El Estado parte estima que el autor no puede aducir que debería haberse beneficiado de las disposiciones de la ley de 5 de marzo de 2007 en materia de protección, ya que el segundo procedimiento fue iniciado por el prefecto del departamento del Ródano el 20 de diciembre de 2011 y que el Fiscal solicitó el aumento de la cuantía de la multa coercitiva el 5 de enero de 2013, es decir, después de que el juez de tutela levantase la medida relativa a su curatela el 29 de noviembre de 2011<sup>27</sup>.

6.8 El Estado parte añade que el procedimiento relativo al aumento de la cuantía de la multa coercitiva iniciado contra el autor estuvo plenamente en consonancia con su derecho a un juicio imparcial, en la medida en que el autor estuvo presente o representado en las audiencias. El Estado parte señala que, aunque el autor no estuvo presente en la audiencia del Tribunal de Apelación de Grenoble de 18 de marzo de 2013, estuvo representado por su abogado, y que compareció en la audiencia del Tribunal de Apelación de Chambéry de 30 de abril de 2015. El Estado parte precisa que la comparecencia del autor en persona era menos importante en ese segundo procedimiento, puesto que las jurisdicciones ya no tenían que pronunciarse sobre su responsabilidad penal, sino exclusivamente sobre el aumento de la multa coercitiva. Además, el Estado parte subraya que el autor también expuso muchos argumentos en apoyo de su defensa, pudo presentar conclusiones e informes detallados ante las jurisdicciones de fondo y ante el Tribunal de Casación, y presentó ante el Tribunal de Apelación de Grenoble y ante el Tribunal de Casación tres cuestiones prioritarias de constitucionalidad; asimismo, pudo solicitar ante el Tribunal de Apelación de Chambéry la realización de un examen psiquiátrico e impugnó ante este tribunal y ante el Tribunal de Casación el interrogatorio de los funcionarios de la Dirección Departamental del Territorio.

6.9 El Estado parte refuta el argumento del autor de que la negativa de las jurisdicciones nacionales a aceptar su solicitud de anulación del procedimiento constituye una violación de su derecho a un juicio imparcial. El Estado parte recuerda al Comité que no le corresponde examinar los hechos y las pruebas o la aplicación de la legislación interna en cada caso particular, a menos que se demuestre que la evaluación de las pruebas o la aplicación de la legislación fue claramente arbitraria o errónea o equivalió a una denegación de justicia o que el tribunal incumplió su obligación de independencia o de imparcialidad<sup>28</sup>. El Estado parte considera que, en este caso, el autor no demuestra que la decisión de que fue objeto haya sido arbitraria, errónea o haya dado lugar a una denegación de justicia.

6.10 El Estado parte precisa que el Tribunal de Casación sancionó la sentencia del Tribunal de Apelación, no por no haber anulado el primer procedimiento, sino por no haber citado a la curadora del autor a las deliberaciones del procedimiento relativo al aumento de la multa coercitiva. El Estado parte recuerda que, a pesar de que ya no era curadora, la esposa del autor había sido emplazada ante el Tribunal de Apelación de Grenoble a cuya audiencia no asistió, así como ante el Tribunal de Apelación de Chambéry, donde pudo ser oída.

6.11 El Estado parte alega que, según el artículo 706-115 del Código de Procedimiento Penal, cuando una persona es objeto de una medida de protección, “antes de que se dicte

<sup>27</sup> Véase a este respecto la sentencia del Tribunal de Apelación de Chambéry de 30 de abril de 2015.

<sup>28</sup> Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 32 (2007), párr. 26.



sentencia sobre el fondo, se debe practicar un examen médico a la persona acusada para valorar su responsabilidad penal en el momento de los hechos”. Sin embargo, el Estado parte añade que el autor ya no era objeto de ninguna medida de protección desde hacía cerca de cuatro años cuando se celebró la audiencia ante el Tribunal de Apelación de Chambéry, y que el Tribunal de Apelación de Grenoble ya había resuelto sobre el fondo del caso en su sentencia de 16 de diciembre de 2008. El Estado parte alega que el artículo D. 47-14 del Código de Procedimiento Penal invocado por el autor a este respecto solo se aplica a los procedimientos penales en curso, y no a los procedimientos de ejecución.

6.12 El Estado parte añade que el procedimiento relativo al aumento de la cuantía de la multa coercitiva no tiene por objeto realizar un nuevo juicio y no se pronuncia en ningún caso sobre la responsabilidad penal de un condenado, ya determinada en el procedimiento principal. Considera, por tanto, que era innecesario realizar un examen psiquiátrico en vista del objeto del procedimiento relativo al aumento de la multa coercitiva y que dicho examen no podía incidir de manera alguna en el resultado del litigio. En efecto, el Estado parte recuerda que el principio de igualdad de medios procesales, invocado en este caso por el autor para fundar su petición de que se realizase un examen psiquiátrico, no implica que se admitan los argumentos presentados por las partes, sino simplemente que estas pueden presentarlos en igualdad de condiciones. Sobre la base de todo lo que antecede, el Estado parte pide al Comité que declare la comunicación infundada.

### **Comentarios del autor sobre el fondo**

7.1 En sus comentarios del 7 de mayo de 2019, el autor subrayó que a lo largo de sus observaciones, el Estado parte subestimó de manera flagrante la gravedad de la enfermedad psiquiátrica que sufría desde hace varios decenios e ignoró completamente los informes periciales psiquiátricos de que fue objeto. Denuncia el hecho de que, mediante sus observaciones, el Estado parte lo haya considerado como un justiciable ordinario que puede utilizar todas sus facultades mentales y garantizar su defensa, a pesar de los numerosos informes psiquiátricos que se habían adjuntado a su expediente. El autor recuerda que, a instancia de las autoridades judiciales, fue examinado por psiquiatras en varias ocasiones y que se presentaron nada más y nada menos que cuatro informes entre agosto de 2010 y octubre de 2017, en el marco de tres procedimientos diferentes: un procedimiento de curatela, un procedimiento de instrucción y un procedimiento de revisión. Subraya que todos estos informes demuestran la gravedad de su enfermedad psiquiátrica y la necesidad de asistencia que esta implica.

7.2 El autor indica que cuando decretó de oficio el levantamiento de la medida relativa a su curatela<sup>29</sup>, el 29 de noviembre de 2011, el juez de tutela de Lyon no tuvo en cuenta la recomendación del perito psiquiatra en la que aconsejaba la prolongación de dicha medida de protección a su favor debido a un trastorno psiquiátrico grave que alteraba su autonomía y su juicio, mientras que el autor y su curadora querían que se prolongase la medida de protección. El autor recuerda que, en el marco del procedimiento de instrucción ante el Tribunal de Gran Instancia de Lyon, donde había actuado como testigo asistido, dos peritos concluyeron por separado, en 2015 y 2017, que no podía ser objeto de un interrogatorio y que padecía un trastorno bipolar de tipo I caracterizado por numerosos episodios maníacos y depresivos graves con conductas suicidas y automutilaciones<sup>30</sup>. El autor añade que, en el marco de la instrucción del procedimiento de revisión de la condena penal dictada en su contra, un perito psiquiatra concluyó, en un informe de fecha 15 de septiembre de 2016, que se sabía que el autor padecía psicosis maníaco-depresiva e indicó que no podía ser objeto de sanción penal.

<sup>29</sup> El 22 de octubre de 2003, el juez de tutela de Lyon sometió al Sr. Ehrmann al régimen de la curatela, ejercida por su esposa.

<sup>30</sup> Véanse los informes médicos de 10 de mayo de 2015 y de 10 de octubre de 2017, adjuntos al expediente.

## Deliberaciones del Comité

### *Examen de la admisibilidad*

8.1 Antes de examinar toda queja formulada en una comunicación, el Comité debe decidir, de conformidad con el artículo 97 de su reglamento, si la comunicación es admisible en virtud del Protocolo Facultativo.

8.2 En cumplimiento de lo exigido en el artículo 5, párrafo 2 a), del Protocolo Facultativo, el Comité se ha cerciorado de que el mismo asunto no está siendo examinado en el marco de otro procedimiento de examen o arreglo internacional.

8.3 El Comité toma nota de la alegación del autor de que el Estado parte violó los derechos que lo asisten en virtud del artículo 14, párrafo 1, del Pacto.

8.4 El Comité observa que el autor presentó una demanda en relación con los mismos hechos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Mediante una carta de 21 de septiembre de 2017, el autor fue informado de que el Tribunal, constituido en formación de juez único, había decidido declarar “inadmisible la demanda porque no se cumplían las condiciones de admisibilidad establecidas en los artículos 34 y 35 del Convenio”. El Comité recuerda que Francia, al ratificar el Protocolo Facultativo, formuló una reserva por la que excluía la competencia del Comité para examinar asuntos que hubieran sido o estuvieran siendo examinados en el marco de otro procedimiento de examen o arreglo internacional.

8.5 Remitiéndose a su jurisprudencia relativa al artículo 5, párrafo 2 a), del Protocolo Facultativo<sup>31</sup>, el Comité recuerda que, cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declara inadmisibile una demanda no solamente por razones de procedimiento, sino también por razones que incluyen, en cierta medida, un examen del fondo, se debe considerar que el asunto ha sido examinado en el sentido de las reservas al artículo 5, párrafo 2 a), del Protocolo Facultativo<sup>32</sup>. Por tanto, corresponde al Comité determinar si en el presente caso el Tribunal fue más allá de un simple examen de los criterios de admisibilidad puramente formales.

8.6 El Comité señala el limitado razonamiento expuesto en la carta dirigida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al autor, que no proporciona ningún argumento o aclaración para fundamentar la decisión de inadmisibilidad en cuanto al fondo<sup>33</sup>. Habida cuenta de esas circunstancias particulares, el Comité considera que no puede determinar con certeza que el asunto presentado por el autor ya haya sido objeto de un examen, aunque fuera limitado, en cuanto al fondo<sup>34</sup>, en el sentido de la reserva formulada por el Estado parte. Por ello, el Comité considera que la reserva formulada por el Estado parte sobre el artículo 5, párrafo 2 a), del Protocolo Facultativo no constituye, en sí misma, un obstáculo para que el Comité examine el fondo<sup>35</sup>.

8.7 El Comité toma nota del argumento del Estado parte de que, en el marco del primer procedimiento que terminó con la sentencia definitiva de 15 de diciembre de 2009 del Tribunal de Casación, el autor no presentó sus alegaciones en virtud del artículo 14, párrafo 1, del Pacto. El Comité observa que el autor no ha refutado dicho incumplimiento en relación con la admisibilidad, en la medida en que de los documentos adjuntos al expediente no se desprende que el autor haya alegado, incluso de manera sustancial, su derecho consagrado en el artículo 14, párrafo 1, del Pacto.

8.8 En el caso del segundo procedimiento, el Comité toma nota del argumento del Estado parte de que la reclamación relativa a la violación del artículo 14, párrafo 1, del Pacto solo se presentó en el marco de un segundo recurso formulado contra la sentencia de 16 de diciembre de 2008 y, por tanto, de manera tardía<sup>36</sup>, y que, en consecuencia, no se han agotado

<sup>31</sup> *Rivera Fernández c. España* (CCPR/C/85/D/1396/2005), párr. 6.2.

<sup>32</sup> Véanse, por ejemplo, *Mahabir c. Austria* (CCPR/C/82/D/944/2000), párr. 8.3; *Linderholm c. Croacia* (CCPR/C/66/D/744/1997), párr. 4.2; y Comité de Derechos Humanos, *A. M. c. Dinamarca*, comunicación núm. 121/1982, párr. 6.

<sup>33</sup> *X c. Noruega* (CCPR/C/115/D/2474/2014), párr. 6.2.

<sup>34</sup> *Mahabir c. Austria*, párr. 8.3.

<sup>35</sup> *Yaker c. Francia* (CCPR/C/123/D/2747/2016), párr. 6.2.

<sup>36</sup> Véase el artículo 618 del Código de Procedimiento Penal.

los recursos internos. Asimismo, el Comité toma nota del argumento del autor de que el Tribunal de Casación, en su sentencia de 24 de junio de 2014, recordó que “dado que la medida de curatela se había publicado, la Fiscalía tenía necesariamente conocimiento de ella [...]” y de que, según el autor, la Fiscalía tenía la obligación de informar a su curadora de todo el procedimiento iniciado en su contra. El Comité observa que el hecho de que el Tribunal de Casación mencione esta formalidad indica que el autor invocó debidamente dicha reclamación durante la instancia. Por tanto, el Comité observa que la reclamación fundada en la violación del artículo 14, párrafo 1, del Pacto fue objeto de reclamación por parte del autor en las instancias nacionales. El Comité considera que, dado que ambos procedimientos están relacionados, la invocación del artículo 14, párrafo 1, en el segundo procedimiento es suficiente a los efectos de la admisibilidad.

8.9 El Comité observa además que el Estado parte no ha impugnado la admisibilidad de la comunicación respecto del argumento relativo a la negativa del Tribunal de Apelación de Chambéry<sup>37</sup> a ordenar la realización de un examen psiquiátrico del autor a fin de determinar su responsabilidad penal en el momento de los hechos que se le imputaban.

8.10 Habida cuenta de lo anterior, el Comité considera que las reclamaciones formuladas por el autor en relación con el artículo 14, párrafo 1, del Pacto están suficientemente fundamentadas a los efectos de la admisibilidad, declara la comunicación admisible y procede a examinarla en cuanto al fondo.

#### *Examen de la cuestión en cuanto al fondo*

9.1 El Comité ha examinado la presente comunicación teniendo en cuenta toda la información que le han facilitado las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, párrafo 1, del Protocolo Facultativo.

9.2 El Comité toma nota de la reclamación del autor de que el Estado parte ha violado los derechos que lo asisten en virtud del artículo 14, párrafo 1, del Pacto, dado que, en todas las etapas del procedimiento, la Fiscalía no informó a su curadora de las condenas y las acciones judiciales emprendidas en su contra para el aumento de la cuantía de la multa coercitiva. El Comité toma nota también del argumento del Estado parte de que el autor pudo beneficiarse de las garantías del derecho a un juicio imparcial, en particular la asistencia letrada, en las diferentes etapas del procedimiento, y que pudo exponer oralmente argumentos bastante precisos en apoyo de su defensa.

9.3 El Comité toma nota del argumento del autor de que el Estado parte no tuvo en cuenta la enfermedad psiquiátrica que sufría desde hace varios decenios, lo trató como una persona ordinaria y no tuvo en consideración los dictámenes de los peritos psiquiatras que habían estimado que requería asistencia. Asimismo, el Comité observa el argumento del Estado parte de que, a pesar de su enfermedad psiquiátrica, el autor pudo desarrollar de manera conveniente los argumentos en apoyo de su defensa, pudo presentar conclusiones e informes detallados ante las jurisdicciones competentes y pudo formular pretensiones argumentadas tanto ante el Tribunal de Apelación de Grenoble como ante el Tribunal de Casación. El Comité también toma nota del argumento del Estado parte de que el autor no indicó la garantía adicional que le habría ofrecido la asistencia de su curadora.

9.4 El Comité observa el argumento del autor de que la negación de las autoridades judiciales del Estado parte a ordenar la realización de un examen psiquiátrico para determinar su responsabilidad penal en el momento de los hechos que se le imputaban lo sumía en una situación de desventaja y vulnerabilidad con respecto a la parte civil y la Fiscalía, sin consideración alguna por el principio de la igualdad de medios procesales, y que la realización de dicho examen era tanto más necesaria cuanto que padecía desde hace más de 39 años de graves trastornos psiquiátricos. El Comité observa asimismo que el Estado parte, si bien reconoce que antes de que se dicte sentencia sobre el fondo, se debe practicar un examen médico a la persona que sea objeto de una medida de protección<sup>38</sup>, invoca no obstante los siguientes argumentos: el autor ya no era objeto de ninguna medida de protección cuando se celebró la audiencia ante el Tribunal de Apelación de Chambéry, el Tribunal de Apelación

<sup>37</sup> Sentencia de 30 de abril de 2015.

<sup>38</sup> Artículo 706-115 del Código de Procedimiento Penal.

de Grenoble ya había resuelto sobre el fondo del caso<sup>39</sup>, y, por último, el procedimiento relativo al aumento de la cuantía de la multa coercitiva no se pronuncia sobre la responsabilidad penal de un condenado, ya determinada en el procedimiento principal. En esas circunstancias, el Comité observa que el argumento relativo a la no realización del examen psiquiátrico fue debidamente examinado por la jurisdicción de remisión, que no puede determinar la procedencia de dicha medida en sustitución de las autoridades judiciales y cuya función se limita a comprobar si la no realización de dicho trámite conllevó una violación de los derechos que asisten al autor en virtud del artículo 14, párrafo 1, del Pacto. Además, el Comité considera que el autor no ha demostrado de qué manera la negación del Tribunal de Apelación de Chambéry a que se realizase el examen psiquiátrico lo había sumido en una situación desfavorable que hubiese mermado el ejercicio de su derecho a un juicio imparcial.

9.5 Por consiguiente, el Comité debe determinar si la no citación de la curadora del autor por la Fiscalía en las diferentes etapas del procedimiento constituye una violación de los derechos que asisten al autor en virtud del artículo 14, párrafo 1, del Pacto. A este respecto, recuerda que las disposiciones del artículo 14 del Pacto tienen por objeto, en general, velar por la adecuada administración de la justicia<sup>40</sup>. En cuanto a las personas vulnerables, como las personas con discapacidad psiquiátrica, el apoyo de un curador o un tutor, además de un abogado, puede reforzar la equidad del procedimiento en virtud del artículo 14, párrafo 1, del Pacto. El Comité recuerda que en el artículo 14 se establecen las garantías que los Estados partes deben respetar, independientemente de su tradición jurídica y de su derecho interno<sup>41</sup>, pero no se indica la manera en que deben aplicar los principios relativos a la imparcialidad del juicio. El Comité considera también que la valoración de las garantías de un juicio imparcial en vista de la situación del autor debe limitarse a las normas generalmente aceptadas del derecho internacional de los derechos humanos, y no a las formalidades del derecho interno, si su omisión no afecta a la imparcialidad o la independencia del juicio.

9.6 Sin embargo, en este caso, el Comité señala que el autor pudo recibir asistencia letrada tanto en el marco de la primera instancia como en el de la instancia de apelación o casación. El Comité observa asimismo que el autor no demostró de qué manera la ausencia de su curadora, que en este caso es su esposa, repercutió negativamente en el disfrute pleno y efectivo de su derecho a un juicio imparcial o, a la inversa, cómo le habría permitido la presencia de su curadora asegurar mejor su defensa a los efectos del artículo 14, párrafo 1, del Pacto.

9.7 A este respecto, el Comité recuerda que no le compete evaluar los hechos y las pruebas en un caso concreto, a menos que pueda demostrarse que los tribunales nacionales fueron claramente arbitrarios<sup>42</sup>, y que en el presente caso no le corresponde interpretar la legislación nacional ni sustituir la valoración de las autoridades nacionales por la suya. En este caso, el Comité considera que no le corresponde reconsiderar la decisión de las autoridades nacionales relativa a la condena penal del autor ni el procedimiento relativo al aumento de la cuantía de la multa coercitiva. El Comité observa además que la sentencia de 29 de noviembre de 2011 por la que se decretó el levantamiento de la medida relativa a la curatela del autor no aportó ningún cambio respecto de la capacidad del autor para defenderse, de manera que, con la ayuda de su curadora o sin ella, el autor pudo comprender las acusaciones formuladas en su contra y presentar argumentos sin limitación alguna, en particular con la asistencia de su abogado. Si bien observa que el Estado parte no informó a la curadora del autor, el Comité considera que, en vista de la información que obra en el expediente, no puede concluir que dicha omisión constituya una conducta arbitraria o una denegación de justicia por parte de los tribunales nacionales, ni que los jueces que intervinieron en los dos procedimientos

<sup>39</sup> Véase la sentencia del Tribunal de Apelación de Grenoble de 16 de diciembre de 2008.

<sup>40</sup> Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 32 (2007), párr. 2.

<sup>41</sup> *Ibid.*, párr. 4.

<sup>42</sup> Comité de Derechos Humanos, *Torregrosa Lafuente y otros c. España*, comunicación núm 866/1999, párr. 6.2; y *Hart c. Australia*, comunicación núm. 947/2000, párr. 4.3.

iniciados contra el autor hayan faltado a su obligación de independencia e imparcialidad, ni en primera instancia ni en los recursos posteriores<sup>43</sup>.

10. En vista de lo que antecede, el Comité considera que la documentación que tiene ante sí no le permite concluir que el Estado parte haya vulnerado los derechos que asisten al autor en virtud del artículo 14, párrafo 1, del Pacto.

11. El Comité, actuando en virtud del artículo 5, párrafo 4, del Protocolo Facultativo, dictamina que los hechos que tiene ante sí no ponen de manifiesto ninguna violación por el Estado parte de los derechos que asisten al autor en virtud del artículo 14, párrafo 1, del Pacto.

---

<sup>43</sup> Véanse, en particular, *Crochet c. Francia* (CCPR/C/100/D/1777/2008), párr. 9.4; y Comité de Derechos Humanos, *Morael c. Francia*, comunicación núm. 207/1986.

## Anexo

### **Voto particular (disidente) de Bacre Waly Ndiaye, miembro del Comité**

1. La protección de un adulto con discapacidad es una cuestión de derecho antes que una cuestión de hecho.
  2. Esto es aún más pertinente cuando la persona debe comparecer ante la justicia penal por actos difíciles de disociar con su estado mental.
  3. Por ello y por los mismos motivos que hicieron que la comunidad internacional aprobase la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y eligiesen a un Comité de Expertos encargado de velar por su cumplimiento, el Estado parte estableció normas de procedimiento que garantizan la protección de las personas con discapacidad y suplen ante el juez de lo penal la desigualdad entre las partes que sufren dichas personas.
  4. El Comité y el propio Estado parte han reconocido que estas normas de procedimiento, en particular la notificación de los actos a la curadora, fueron vulneradas de manera incontestable y reiterada respecto del Sr. Ehrmann.
  5. Dado que se determinó que se produjo dicha vulneración de normas de procedimiento con carácter sustantivo —al tener por objeto compensar la desigualdad sufrida por la persona con discapacidad y garantizar su protección— también debería haberse determinado que se vulneraron las disposiciones del artículo 14 del Pacto destinadas a garantizar la igualdad de las partes y el estricto respeto de las garantías procesales, sin que sea necesario iniciar una investigación dudosa y empírica de las capacidades mentales del autor en cada etapa del procedimiento.
  6. Esto es tanto más pertinente cuanto que la realización del examen psiquiátrico, que debería ser su fundamento, fue denegada por el juez nacional.
  7. La protección de los adultos incapacitados se funda en las mismas reglas y principios que la protección de los niños. Sin embargo, el respeto de las normas de protección de los niños está garantizado ante los jueces de lo penal y de lo civil, sin que se contemple la posibilidad de analizar la madurez del menor o de preguntarse si a pesar de la ausencia de tutor, el menor tenía o no un abogado competente.
  8. El Comité de Derechos Humanos recomienda periódicamente a los Estados partes que aumenten la minoría de edad legal para ampliar el espectro de la protección. Este mismo planteamiento, estas mismas preocupaciones y esta misma intransigencia en la protección se deberían haber respetado en el caso del autor, que es un adulto con discapacidad mental.
-